



Hace ahora una década, un economista y un politólogo, los japoneses Kazumasa Oguro y Ryo Ishida, sacaron la calculadora y empezaron a trazar tablas para diseñar un plan que paliara la exagerada influencia política que ya tenían entonces los ancianos del país más envejecido del mundo. «Cada generación es egoísta y se comporta de acuerdo con la hipótesis de su ciclo de vida», explicaron entonces.

Su investigación construía un «modelo de superposición de generaciones» —así lo llamaron— para demostrar que el creciente desequilibrio entre la población activa y los jubilados dañaba la calidad de las decisiones políticas sobre inversiones públicas y pensiones. Y planteaba una novedosa solución: diseñar un sistema electoral que asignara los escaños en función de la esperanza de vida de los votantes.

Si el voto de un soriano en España vale tres veces más que el de un madrileño, debieron de pensar Oguro e Ishida, por qué no puede valer más el voto de un joven que el de un viejo. Según su fórmula, si los ciudadanos vivieran hoy una media de 100 años, el número de escaños elegidos por los más jóvenes deberían valer 1,2 veces más que los de un votante de mediana edad y 2,3 veces más que los de un anciano. Se trataría, en definitiva, de igualar un sistema condenado a blindar las políticas a corto plazo y a olvidar a las generaciones futuras por culpa de la baja natalidad y el irremediable envejecimiento de la población.

Su proyecto nunca llegó a ejecutarse, claro, pero sí puso sobre la mesa un conflicto cada día más evidente. Japón es hoy el país con la mayor esperanza de vida en todo el mundo, con una media de 84,4 años. España, con 83, es el cuarto en el ranking, sólo por detrás de Suiza y Singapur.

Cada día que pasa, nuestra esperanza de vida crece cinco horas. Cada año ganamos casi tres meses y en una década, unos dos años y medio. Piense que en el rato que usted dedica a leer este reportaje, su esperanza de vida se habrá prolongado en unos tres minutos.

(Sólo si llega hasta el final, por supuesto, así que siga leyendo).

Esa es la buena noticia. La mala es que un país en el que la natalidad se desploma, en el que cada vez hay más viejos y en el que esos viejos son cada vez más viejos es un país insostenible en el plano económico, socialmente desequilibrado y a merced del llamado *poder gris* en el terreno político. Esa *yayocracia*, diríamos, que quisieron compensar sin éxito dos investigadores japoneses hace ahora diez años.

«La dignidad de un país se mide por cómo trata a sus mayores», proclamó esta semana la ministra

de Hacienda, María Jesús Montero, tras anunciar que las pensiones crecerán en 2023 un 8,5%, la mayor subida de la historia. La partida aumentará un 11,4%, casi 20.000 millones más de euros, y las prestaciones atraparán el 39% del gasto total previsto en los Presupuestos hasta llegar a los 190.687 millones.

Un pequeño recordatorio: el año que viene hay elecciones.

Nadie (o casi nadie) cuestiona la necesidad de revalorizar unas pensiones que a menudo han sostenido la economía familiar durante los años de crisis y pandemias. Sin embargo, el desequilibrio que muestran las cuentas del Estado es la radiografía de un desajuste condenado al colapso y que puede hacer tambalear el llamado pacto generacional. Pan para hoy y crisis morrocotuda para mañana.

«Nosotros pagamos la pensión de los que se jubilan con la promesa de que se nos pagará a nosotros cuando dejemos de trabajar, pero eso implica que haya cierto equilibrio entre la masa salarial y la masa de las pensiones, porque lo segundo sale de lo primero», advierte el sociólogo Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade. «Cuando se rompe ese equilibrio, como está pasando desde hace muchos años en términos demográficos, se produce un déficit de la Seguridad Social como el que tenemos y un aumento del presupuesto de gasto

El Gobierno presumió esta semana de que sus cuentas son «unos presupuestos para los jóvenes», pero lo cierto es que las inversiones destinadas a ellos suman 12.741 millones de euros, sólo el 3% del total, 15 veces menos que el gasto en pensiones.

Jorge Galindo, coeditor también de *Politikon*, ya participó en 2017 en un ensayo coral que se llamó *El muro invisible*.

*Las dificultades de ser joven en España*. Su análisis sigue vigente cinco años y una pandemia después. El año pasado, junto a la investigadora Ariane Aumaitre, elaboró un informe que retrataba todos los males de *La generación de la doble crisis*, la que nació entre 1985 y 1995 y la única en el último siglo que ha atravesado dos grandes recesiones en su periodo de formación e incorporación al mercado laboral. Su estudio confirmaba los datos más agoreros: los jóvenes poscrisis en todo el sur de Europa tienen menos ingresos, menores

décadas mientras que los mayores de 45 son más ricos. El último Observatorio de Emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España dice también que en 2021 sólo un 15,6% de los menores de 29 años podía emanciparse, frente al 26% que se lo podía permitir hace 15 años.

Desde entonces, la pensión de jubilación media en España ha aumentado un 60% mientras que los salarios lo han hecho un 29%. Otra vez la brecha generacional.

«Esa diferencia va a seguir creciendo de forma descomunal», advierte el doctor en Economía José Antonio Hercé, socio fundador de LoRIS y autor de *A vueltas con las pensiones: Reflexiones, ideas y ocurrencias*. «Lo que se ha decidido para 2023 va a tener repercusiones durante mucho tiempo, virtualmente para dos décadas. El aumento del gasto es tan monstruoso que se va a instalar en pagos que va a haber que mantener y consolidar en los años venideros. Y no va a poder

que llevó a miles de jubilados a la calle en 2020 en defensa de unas pensiones dignas. «Mientras no se produzcan cambios en este sentido, asistiremos a problemas de esta naturaleza y habrá quienes interesadamente alimenten un conflicto intergeneracional que no existe».

Echemos otro ojo a los presupuestos presentados esta semana. Los últimos cálculos dicen que sólo la revalorización de las pensiones generará un gasto cercano a los 13.000 millones de euros, pero la mitad de esa cantidad la absorberán las pensiones más altas, que apenas suponen un 25% del total. Según estimaciones de un grupo de expertos de las Universidades de Valencia y Extremadura, los pensionistas que menos cobran, con prestaciones por debajo de los 629 euros, recibirán apenas uno de cada 10 euros del aumento total. «Un incremento lineal de las pensiones, independientemente del nivel de renta del hogar del

## EL DEBATE TABÚ DE LAS PENSIONES: ¿SON UNA CONDENA PARA EL FUTURO DE LA JUVENTUD?

ILUSTRACIÓN DE RAÚL ARIAS  
RODRIGO TERRASA



público a unos volúmenes demasiado grandes».

Galindo, que tiene 37 años, publicó esta misma semana un mensaje que abrió el debate en Twitter (si es que es eso posible). Decía así: «Los PGE 2023 traen 19.500 millones de euros extra para pensiones, y 390 millones extra para becas. Esas son las prioridades actuales de nuestro estado de bienestar».

Imaginen el ruido que vino después.

«Cuando dices que existe un problema de justicia intergeneracional, te acusan directamente de atacar a la gente mayor, pero eso es la superficie del argumento, la parte estética», lamenta el sociólogo. «En la profundidad de esta situación está que los mayores son muchos y votan todos. Y votan sobre todo a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE, y eso bloquea cualquier tipo de reforma estructural. Al final tenemos un sistema de protección social sesgado hacia la gente de más edad y una mayor protección ante la pobreza para los mayores que para los jóvenes».

tasas de empleo y menores tasas de emancipación, viviendo en propiedad, fertilidad o riqueza potencial que su generación predecesora. Pero también son menos y votan menos, así que...

«La juventud queda atrapada en un dilema irresoluble», sostiene Galindo. «Por un lado, no quieren criticar el sistema actual porque sienten que eso puede dañar sus perspectivas de tener una pensión a largo plazo. Pero, por otra parte, tienen que soportar toda la carga de la crisis a corto plazo. Viven atrapados entre el miedo y la indignación».

Según la última Encuesta Financiera de las Familias, publicada por el Banco de España, los jóvenes son hoy mucho más pobres que hace dos

ser financiado con recursos generados por la misma mecánica porque los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación y las pensiones».

El círculo vicioso dice que invierten en pensiones mientras se deteriora sin remedio la situación económica de los más jóvenes, que, por tanto, tienen menos hijos, carreras menos estables, no tienen ni casa y tienen menos recursos para mantener el dichoso círculo girando.

«A quien hay que pedir cuentas no es a los pensionistas, sino a los empresarios y a los gobiernos que no significan los salarios de las nuevas generaciones», aclara Jon Fano, uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas en Vizcaya, germen de la revuelta

**'Yayocracia'. El cada vez mayor peso electoral de los jubilados condiciona el gasto público en España, pero también amenaza el porvenir de los jóvenes: "Estamos atrapados entre el miedo al futuro y la indignación por tener que soportar la carga de la crisis"**



pensionista, puede acabar produciendo que le estemos dando más a quien ya gana más», asegura Jorge Galindo.

Desde el PP han reclamado esta semana que las pensiones más bajas sí se actualicen con el IPC pero piden que las más altas se referencien a un futuro pacto de rentas. Hercé no está de acuerdo: «Es de justicia actualizarlas todas por igual porque si la Seguridad Social te recompensa cada vez menos por haber cotizado mucho, quién va a querer cotizar mucho en el futuro, quién va a querer siquiera trabajar... Lo que no es justo es que se actualicen las pensiones con un IPC desproporcionado y el resto de agentes económicos tengan que aguantarse».

Empezando (sigue girando el círculo) por los más jóvenes. Según un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, los españoles de entre 18 y 35 años cobran hoy salarios hasta un 50% más bajos que los trabajadores de la misma franja de edad en 1980. Cuatro de cada diez menores de 25 no tienen trabajo en España y somos el país de la OCDE con el paro juvenil más alto, el doble de la media europea. Con este panorama, habrá que sostener el sistema en un país que dentro de 30 años tendrá 7 millones de personas más en edad de jubilación y 10 millones de personas menos de entre 16 y 64 años. La OMS alerta de que en 2050 España será el país más envejecido de todo el planeta.

«No podemos quedarnos en el cortoplacismo de los planteamientos electorales ni en los mensajes de Twitter en tiempos de inflación», censura Emilia Riesco, directora de Sociología de la Universidad de Salamanca y especialista en envejecimiento de la población y participación política. «Es necesario el diálogo social al margen de medidas partidistas y una revisión del sistema de pensiones y de salud en el que los jóvenes entiendan que ellos son los mayores del mañana, quienes disfrutarán las pensiones del futuro».

Mucho más escéptico es el economista argentino Carlos Rodríguez Braun. «No se ha roto ningún contrato social en España porque nunca lo hubo», sentencia. «No puede existir ningún pacto generacional, porque la sociedad no acuerda, la sociedad vota y los políticos imponen. El Estado no es gratis. Todo lo que hace el Estado tiene costes y beneficios y el Estado siempre trata de salir beneficiado. Para eso selecciona a los damnificados: o fastidia a los pensionistas o fastidia a los que pagan las pensiones y el Gobierno elige a los pensionistas no sólo porque son más, sino porque resulta muy visible su beneficio».

Ya saben: «La dignidad de un país se mide por cómo trata a sus mayores»...

El problema actual, sigue Rodríguez Braun, es que el llamado estado del bienestar ha entrado en un creciente proceso de deslegitimación porque la gente cada vez es más consciente de los costes y percibe menos los beneficios. «Los jóvenes no van a salir a la calle a matar ancianos, al menos eso espero, así que lo único que pueden hacer es votar», concluye.

Y así cerramos de nuevo el círculo. La semana pasada, el Congreso rechazó por tercera vez ampliar el derecho al voto a los 16 años, una propuesta recurrente de ERC para combatir, dicen, la «visión adultocentrista» de la sociedad. «¿Alguien querría un alcalde de 16 años?», bromeo el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro (63 años) antes de votar en contra.

Lo cierto es que propuestas similares se debaten cada vez con mayor fuerza en todo el mundo para intentar compensar ese *poder gris* que ya cuantificaron en Japón Kazumasa Oguro y Ryo Ishida. Para restablecer de verdad el vaporeado pacto generacional. A finales del año 2016, apenas seis meses después del referéndum que dijo sí al Brexit en Reino Unido, un arquitecto británico llamado Steve Lawrence predijo que los partidarios de seguir en la Unión Europea habrían ganado con un 52% de los votos de realizarse la consulta sólo seis meses después. La razón era muy sencilla: 123.411 de las personas que habían votado a favor de la salida habían muerto en ese intervalo de seis meses, la mayor parte de ellos de viejos.

Según una encuesta que se hizo entonces, el 64% de los británicos de entre 18 y 24 años preferían quedarse en la UE. Pero casi el 60% de los mayores de 65 votaron por la escapada. Los primeros vivirán una media de 70 años fuera de Europa. Los segundos, no más de 16. «Si un joven de 15 años no puede adoptar una decisión sobre su propio futuro, ¿por qué puede hacerlo quien no va a ver ese futuro?», se preguntaba también en Italia el político y cómico (de 71 años) Beppe Grillo.

«Cualquier mecanismo que aumente la presencia política y el poder de la gente más joven, como mínimo, deberíamos considerarlo seriamente», defiende Jorge Galindo, optimista pese a todo con la caída del *muro invisible*.

«Estamos menos lejos que hace 10 años de encontrar una solución. Por un lado, por la merma de poder de los partidos mayoritarios y por otro, porque con cada presupuesto el desequilibrio es más claro y evidente. Con la protección de nuestro estado del bienestar y el equilibrio intergeneracional ha pasado como con el cambio climático, hemos pasado de negarlo a discutir por fin sobre las soluciones».